

**JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL:** San Salvador, a las quince horas cinco minutos del día diez de febrero de dos mil veinte.

Por recibida la presente demanda suscrita por la licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz, en el Proceso de Ejecución Forzosa, promovido por la precitado Licenciada Rodríguez Ortiz, en contra de los miembros del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, señores [REDACTED]

[REDACTED] juntamente con la siguiente documentación: 1) Copia certificada por notario de Testimonio de Escritura Matriz de Poder General Judicial y Administrativo, otorgado por la licenciada Silvia Cristina Pérez Sánchez, en su calidad de Representante Legal del Instituto de Acceso a la Información Pública a favor de la licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz y otros; 2) copia certificada por notario de Tarjeta de abogado de la licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz; 3) copia certificada por notario de certificación de acuerdo ejecutivo número 104, de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve; 4) copia certificada por notario de Tarjeta de Identificación Tributaria del Instituto de Acceso a la Información Pública, de Documento Único de Identidad y Tarjeta de Identificación Tributaria de las licenciadas Silvia Cristina Pérez Sánchez y Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz; 5) certificación extendida por el Diario Oficial de fecha treinta de enero del año en curso, del diario oficial tomo 387, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; 6) certificación de expediente de apelación de referencia LAIP NUE 70-A-2018, extendido por el Gerente de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha treinta de enero del año en curso.-

Se hace constar que toda la documentación arriba relacionada ha sido presentada con sus respectivas copias de ley de conformidad al artículo 162 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Analizada que ha sido la demanda de ejecución forzosa y demás documentos presentados, el suscrito juez considera oportuno pronunciarse en el siguiente sentido:

El Art. 277 inc. 1º CPCM dispone que "si, presentada la demanda, el Juez advierte algún defecto en la pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo; carezca de competencia objetiva o de grado, o atinente al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa juzgada, compromiso pendiente; evidencie falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, se rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo explicar los fundamentos de la decisión".

Así mismo el art. 575 del CPCM, en lo atinente al caso regula que "si la solicitud no se ajustara a los requisitos de fondo expresados en el artículo 574, el juez rechazará in limine la ejecución mediante auto expresamente motivado"...

Razón por la cual el Órgano Judicial debe examinar y concluir al momento de recibir la demanda o solicitud si la pretensión puede ser juzgada. Luego de este examen de fundabilidad, la norma establece un análisis sobre: los presupuestos exigibles revisables de oficio; en esta categoría tenemos los presupuestos procesales, que son requisitos que deben estar completados para el nacimiento y desarrollo válido del proceso o de una relación procesal válida; consiste en las condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la demanda, esto es, a fin de que se concrete el poder-deber del Juez de proveer sobre el mérito.

Es presupuesto básico para iniciar las actividades de ejecución forzosa la existencia de un documento donde resulte determinada una obligación o un deber, cuyo cumplimiento puede exigirse de una persona (deudor o ejecutado), en favor de otra (acreedor o ejecutante); en esto consiste el título de ejecución.

Al respecto podemos señalar tres características fundamentales que posee todo título de ejecución:

a) En primer lugar, se trata de un documento que, por disposición expresa de la ley, se convierte precisamente en un título de ejecución, constituyendo por sí solo condición necesaria y suficiente para despacharla, de modo que se requiere sólo su regularidad formal.

b) En segundo lugar, el título de ejecución documenta una obligación o, más genéricamente, un deber cuyo cumplimiento se persigue y que puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

c) Finalmente, el título de ejecución determina cuáles han de ser las partes legítimas en dicho procedimiento; bien quienes figuren en él como acreedor y deudor de la prestación. -

Para el caso de marras nos referiremos a la tercera de las características del Título de ejecución, es decir a las partes legitimadas para intervenir válidamente en el proceso de ejecución que nos ocupa. -

Al respecto el art. 560 inc. 1 CPCM, regula los límites de la actividad de ejecución, el cual textualmente dice: "El título de ejecución determina los límites de la actividad para darle cumplimiento, y por consiguiente son nulas las actuaciones de ejecución forzosa que se extiendan a cuestiones sustanciales que no hubieran sido decididas en el proceso correspondiente o que contradigan el contenido del título". Así mismo el art. 564 del mismo cuerpo legal establece quienes serán las partes en la ejecución y textualmente dice: **"será parte legítima en la ejecución forzosa el que la pide y también aquél contra el que se ordena, que habrá de ser el que figure en el título como obligado al cumplimiento"** (las negritas son mías); en ese sentido si en la resolución definitiva NUE 70-A-2018 (RC), identificada como [REDACTED] contra Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) se ordena al INDES a entregar la documentación ahí relacionada, no podemos darle trámite en esta sede judicial a una demanda interpuesta en contra de una persona diferente a la que figura como parte obligada en el título de ejecución. -

Respecto a lo anterior en primer lugar es de aclarar que el proceso se caracteriza por ser una relación jurídica entre dos partes, por lo que debe apreciarse la legitimación procesal como consideración legal respecto de la pretensión incoada; es decir la relación de las partes con el objeto del litigio, en virtud del cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda ser examinada, que dichas personas figuren como tales en el proceso, esto es así, por cuanto la calidad de parte es; esencialmente procesal, y viene dada por una determinada posición en el proceso. De allí, pues que la legitimación procesal pueda definirse

como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso que le permite obtener una providencia eficaz y que, significa un presupuesto para la decisión de fondo; es preciso pues que el juzgador previamente analice si las partes son las que deben de estar, esto es aquellos que son titulares de los derechos que se discuten.

Así mismo es importante traer a colación que para ser parte en un proceso, esto es para ocupar una de las posiciones antagónicas que en él existen, se necesita tener capacidad para ser parte, la cual puede ser definida como la aptitud jurídica para ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal, esta no es más que la aplicación al campo procesal de la capacidad jurídica o capacidad de derecho, es decir, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones en general que tiene toda persona por el simple hecho de ser persona y que es conocida también como capacidad de goce, pero este tipo de capacidad no es suficiente para poder actuar en un proceso, ya que para ello es necesario además tener capacidad procesal entendida como la aptitud para poder realizar con eficacia actos procesales de parte, es conocida también como "legitimatio ad processum". Es por ello que la jurisprudencia considera que "la capacidad de ser parte y la capacidad procesal no son más que la aplicación al campo procesal de la capacidad de ejercicio. Y es que, dentro de cada proceso, la ley determina los sujetos que habrán de intervenir en el mismo en atención a la relación que guardan con su objeto, es decir, con la pretensión procesal"

Por lo tanto, y conforme a lo regulado en los arts. 560, 564, 575 del Código Procesal Civil y Mercantil estamos frente a una solicitud manifiestamente improponible, por cuanto, la pretensión no puede ser jurídicamente tutelable, pues adolece de presupuestos materiales o esenciales en la pretensión, como lo es la legitimación pasiva, en consecuencia y siendo este un requisito el cual el suscrito Juez no puede suplir, se denota la falta de configuración del extremo pasivo de la pretensión, lo que deviene en el rechazo "In limine litis" de la demanda presentada, en consecuencia, **declarase Improponible** la demanda interpuesta por la licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz, en su carácter de apoderada general judicial del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, en contra de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Tome nota la Secretaría de este tribunal de la dirección señalada para recibir notificaciones, así como de los medios técnicos señalados para tal efecto.

**NOTIFIQUESE** el contenido de la presente resolución al Instituto de Acceso a la Información Pública, a través de su apoderada general judicial licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz, en la siguiente dirección: Colonia San Antonio Abad, N° 88, Calle al Volcán, Prolongación Avenida Alberto Masferrer, San Salvador; al telefax: 2205-3800



11 8 MAR 2020

REF: 00936-20-CVEF-3CM3

E.M. (5)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100